



**AMPARO EN REVISIÓN No. 536/2006**

**PROCEDENCIA: AMPARO INDIRECTO  
No. 410/2006**

**MATERIA: ADMINISTRATIVA.**

**RECURRENTE:**

**MAGISTRADO PONENTE:**

**LIC. RODOLFO R. RÍOS VÁZQUEZ.**

**SECRETARIO:**

**LIC. ANA MARÍA CHIBLI MACÍAS.**



Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al día nueve de noviembre del año dos mil seis.

**VISTO;** para resolver el amparo en revisión número 536/2006, relativo al recurso de revisión interpuesto por , autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo por contra la sentencia de veinte de julio de dos mil seis, cuyo engrose concluyó el veintiuno de agosto siguiente, emitida por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el juicio de amparo indirecto número 410/2006; y

**RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil seis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, , por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León, señalando como actos reclamados los siguientes:

**“ACTOS RECLAMADOS: I.-** La emisión del auto de "fecha 24 de mayo de este año y que me fuera notificado el "día 29 de mayo del 2006 (anexo No. 1), por medio del cual "se desecha por extemporánea mi solicitud (anexo No. 2), por "cuanto a que pedí la intervención de la responsable, con el "fin que el tercero perjudicado me proporcionara la "información que le detallé en mi promoción (y que me fuera "negada el día 8 de mayo del 2006, mediante instructivo "UEAI-001/06 por el titular de la Unidad de Enlace y Acceso "a la Información U.A.N.L. y oficio UEAI-085/06: (Anexo "No. 3), atento a lo previsto por el artículo 36 de la Ley de "Acceso a la Información Pública de Nuevo León.--- **II.-** El "auto de fecha 1-primero de junio de este año y que me fuera "notificado el día 2 de junio del 2006 (Anexo No. 4), por "medio del cual se desecha por extemporánea la promoción "que contiene el recurso de revisión fundamentado en el "artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública de "Nuevo León y que presenté el día 30 de mayo del año actual "(Anexo No. 5), en contra del referido auto de fecha 24 de "mayo del año en curso.--- El fundamento para desechar el





"recurso lo fue que no es jurídicamente posible la aplicación  
"supletoria de la Ley de Justicia Administrativa vigente en la  
"Entidad a la Ley de Acceso a la Información Pública del  
"Estado, fundamentalmente sostiene el criterio de que se  
"crearía una nueva figura jurídica consistente en el referido  
"recurso de revisión, no establecido en la legislación que se  
"pretende suplir, con lo que se desvirtuaría la supletoriedad  
"que es la de colmar las deficiencias de las disposiciones que  
"reglamente la figura jurídica".

En la propia demanda, la quejosa señala que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

**SEGUNDO:** Previa tramitación del juicio de garantías que se registró con el número 410/2006, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, a quien por turno conoció del asunto, dictó sentencia el veinte de julio de dos mil seis, cuyo engrose concluyó el veintiuno de agosto siguiente, al tenor del siguiente punto resolutivo.

**“ÚNICO:** Se sobresee el presente juicio de garantías 410/2006, promovido por contra actos de la **COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN**, en términos del considerando tercero de esta sentencia”.

COLEGIADO  
ADMINISTRATIVO  
CIRCUITO

**TERCERO:** Inconforme con la mencionada sentencia, [redacted], por conducto de Pedro [redacted], en su carácter de autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por auto de veinticinco de septiembre de dos mil seis, se registró bajo el número 536/2006, se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento y, por auto de diecisiete de octubre siguiente, se turnó al magistrado ponente para la formulación del proyecto respectivo.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 83, fracción IV, de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el acuerdo general número 84/2000, puntos segundo y cuarto del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre del año dos mil, toda vez que el recurso de mérito se interpuso contra una resolución emitida por un juez de Distrito, en materia administrativa, residente en esta entidad federativa.

**SEGUNDO:** La resolución que se combate fue notificada a la recurrente el treinta de agosto de dos mil seis, y





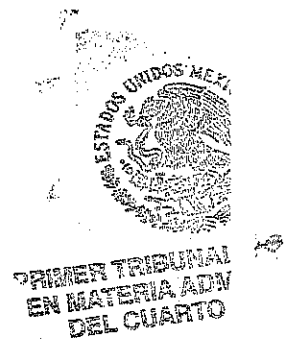
el presente medio de impugnación lo interpuso el doce de septiembre siguiente, por lo cual debe concluirse que fue promovido oportunamente, es decir, dentro del término de diez días, que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, al descontar los días dos, tres, nueve y diez de septiembre de la citada anualidad, por ser inhábiles.

**TERCERO:** La resolución que se revisa se apoyó, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:

**"SEGUNDO:** La autoridad responsable, **COMISIÓN DE "ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE "NUEVO LEÓN**, al rendir su informe justificado negó la "existencia del acto reclamado, consistente en la emisión de "los autos de fecha veinticuatro de mayo y primero de junio "del año en curso, por medio de los cuales se desechan, la "solicitud de intervención hecha por la quejosa en contra del "Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de "la Universidad Autónoma de Nuevo León y el recurso de "revisión interpuesto en contra del auto antes mencionado de "veinticuatro de mayo; sin embargo, dicha negativa se "desvirtúa, ya que no es el caso decretar el sobreseimiento con "fundamento en la causal prevista en la fracción IV del "artículo 74 de la Ley de Amparo, en razón de que al escrito "inicial de demanda la impetrante de garantías anexó diversas "constancias de las cuales se desprende la existencia de los "actos reclamados, es decir, de la copia simple del instructivo "de notificación de veintinueve de mayo de dos mil seis, "levantado por el actuario adscrito la Comisión de Acceso a

COLEGIADO  
NISTRATIVA  
IRCUITO

"la Información Pública de Nuevo León, mediante el cual le  
 "notificó a la quejosa el proveído de veinticuatro de mayo del  
 "año en curso, así como del original del instructivo de  
 "notificación de dos de junio de dos mil seis, levantado por el  
 "actuario adscrito la Comisión de Acceso a la Información  
 "Pública de Nuevo León, mediante el cual notificó a la  
 "solicitante de amparo el auto del primero de junio de este  
 "año, documental la última a la cual se le concede pleno valor  
 "probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código  
 "Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a  
 "la Ley de Amparo, se advierte que los proveídos que por esta  
 "vía se combaten fueron emitidos respectivamente, el primero  
 "por el Comisionado Presidente de la Comisión de Acceso a  
 "la Información Pública de Nuevo León, en unión del  
 "Secretario de Acuerdos y Proyectos en funciones de Director  
 "Jurídico de dicho organismo y, el segundo, por el  
 "Comisionado Propietario en unión del mencionado  
 "Secretario de Acuerdos y Proyectos del referido organismo  
 "público, por lo que se concluye que los actos reclamados son  
 "existentes y fueron emitidos por la autoridad señalada como  
 "responsable dentro del presente juicio de garantías.--- No es  
 "óbice para lo anterior, el argumento hecho valer por la  
 "responsable, referente a que los actos reclamados no fueron  
 "emitidos por los integrantes que forman la Comisión de  
 "Acceso a la Información Pública de Nuevo León, en su  
 "carácter de cuerpo colegiado, ya que si bien es cierto que en  
 "el capítulo correspondiente de la demanda de amparo, la  
 "quejosa señaló como autoridad responsable a la Comisión de





"Acceso a la Información Pública de Nuevo León, sin  
"especificar al Comisionado que en forma unitaria dictó los  
"proveídos recurridos, también lo es que del informe rendido  
"por la responsable se advierte la existencia del acto  
"reclamado, hecho el cual se robustece con las documentales  
"exhibidas por la solicitante de amparo con su escrito inicial  
"de demanda, por lo que quedó acreditada la existencia de los  
"autos que constituyen el acto reclamado y su autoría por los  
"Comisionados que los dictaron en forma unitaria, los cuales  
"son integrantes de la Comisión señalada como autoridad  
"responsable, de la cual no es factible legalmente  
"desvincularlos, por formar parte integrante de un órgano que  
"actúa en forma colegiada y cuyos miembros únicamente en  
"tratándose de infracciones procedimentales emiten  
"resoluciones en forma unitaria, como aconteció en la especie;  
"de ahí que resulte irrelevante la confusión en que incurrió la  
"quejosa al haber señalado como autoridad responsable a la  
"Comisión en vez de los Comisionados, habida cuenta de que  
"obran en los autos del juicio de garantías los elementos y  
"datos necesarios para estudiar y resolver sobre la  
"constitucionalidad de los actos reclamados, según lo  
"expuesto por la amparista en sus conceptos de violación y,  
"en consecuencia, cabe concluir que se acredita plenamente la  
"existencia de los actos reclamados.--- Es aplicable al caso  
"por analogía, la jurisprudencia número I.6º.C. J/6, DE LA  
"NOVENA ÉPOCA, SUSTENTADA POR EL Sexto  
"Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,  
"visible en la Página 549, del Tomo VI, del Semanario Judicial

COLEGIADO  
ADMINISTRATIVO  
PRIMER CIRCUITO

"de la Federación y su Gaceta, de agosto de mil novecientos  
 "noventa y siete, cuyo rubro y texto al tenor literal establecen:  
 "“IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. NO SE  
 "“ACTUALIZA POR CONFUSIÓN EN EL  
 "“SEÑALAMIENTO DE LA AUTORIDAD  
 "“RESPONSABLE, SI SE RINDE EL INFORME  
 "“JUSTIFICADO ACEPTANDO EL ACTO. No se  
 "“actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en  
 "“el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral  
 "“116, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, cuando en la  
 "“demanda se señala con el carácter de responsable a la Sala respectiva,  
 "“si quien emitió el acto fue un Magistrado de manera unitaria y no  
 "“obstante esa imprecisión, la Presidencia de la ad quem rinde el informe  
 "“justificado aceptando la existencia del acto reclamado y en vía de  
 "“justificación remite el toca de apelación de que se trata, lo cual resulta  
 "“suficiente para poder analizar la constitucionalidad del acto en  
 "“comento”.--- **TERCERO:** Previo al análisis de los  
 "conceptos de violación aducidos por la parte quejosa,  
 "conviene precisar que las causales de improcedencia deben  
 "ser examinadas de oficio, ya sea que lo aleguen o no las  
 "partes, por ser de orden público y de estudio preferente, de  
 "conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, último  
 "párrafo, de la ley de la materia.--- Ahora bien, el suscrito  
 "juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia  
 "consistente en no agotar el principio de definitividad,  
 "prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo,  
 "para cuyo efecto resulta pertinente tomar en consideración lo  
 "dispuesto por el mencionado artículo de la ley de la materia,







"el cual al tenor literal establece: **"73. El juicio de amparo es**  
**"improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los**  
**"tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser**  
**"revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda en**  
**"contra de ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud**  
**"del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que**  
**"conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos**  
**"mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga**  
**"valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente**  
**"ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente**  
**"de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser**  
**"suspendido de acuerdo con esta ley; ...".**--- De acuerdo con el  
"artículo 73, fracción **XV** de la ley de la materia, el juicio de  
"amparo es improcedente contra actos de los tribunales  
"judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser  
"revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o que  
"proceda contra de ellos algún recurso, juicio o medio de  
"defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados,  
"revocados o nulificados, y que dichos actos pueden  
"suspenderse sin mayores requisitos que los que exige la Ley  
"de Amparo para otorgar la definitiva.--- En este sentido, se  
"estima necesario señalar que el juicio de amparo constituye  
"un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad  
"conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual,  
"su estructura se funda en diversos principios o postulados  
"básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de  
"defensa común. Dichos principios generales del juicio de  
"amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la

MEXICANO

EL COLEGIADO  
MINISTRATIVO  
CIRCUITO

"Constitución General de la República, entre los que se  
 "encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir  
 "la procedencia de la acción constitucional.--- En efecto, el  
 "principio de definitividad del juicio de amparo, obliga al  
 "quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos  
 "ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el  
 "acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o  
 "nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de garantías se  
 "concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que  
 "significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo  
 "son, entre otros, aquéllos que ya no son susceptibles de ser  
 "revisados a través de los citados recursos o medios de  
 "defensa ordinarios.--- Ahora bien, tomando en cuenta los  
 "aspectos antes destacados, debe decirse que por "leyes que  
 "rigen el acto" o "leyes del acto" debe entenderse, aquellos  
 "ordenamientos legales, que propiamente se refieren a dichos  
 "actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o  
 "instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de  
 "impugnación; en la inteligencia de que no siempre tales actos  
 "serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede  
 "darse el caso de que esto ocurra a través de diversos, e  
 "incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio  
 "o medio de impugnación que proceda contra ellos, por  
 "virtud del cual puedan ser modificados, revocados o  
 "nulificados, con la condición de que conforme a las mismas  
 "leyes se suspendan los efectos de los actos con la  
 "interposición del recurso, sin exigir mayores requisitos que  
 "los que la Ley de Amparo consigna para la concesión de la





"suspensión definitiva, con independencia de que el acto en sí  
"mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido  
"de acuerdo con lo previsto en dicha ley.--- En este orden de  
"ideas, resulta congruente afirmar que en determinados  
"asuntos o materias, el acto puede no ser regido por un solo  
"ordenamiento legal, sino por varios; esto es, uno lo puede  
"instaurar, otro puede establecer el medio de impugnación en  
"su contra y otro más quien se encargue de desarrollarlo.---  
"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.  
"3/2001 de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la  
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página  
"ocho del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación  
"y su Gaceta de enero de 2001, cuyo rubro y tesis establecen:  
"**“DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO.**  
"**“SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN “LEYES QUE**  
"**“RIGEN LOS ACTOS” A QUE SE REFIERE EL**  
"**“ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE**  
"**“LA MATERIA.** El artículo 73, fracción XV, de la Ley de  
"Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra  
"actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales,  
"administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio,  
"conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún  
"recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el agraviado,  
"sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para  
"conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en  
"sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de  
"acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto,  
"se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los

COLEGIADO  
NISTRATIVA  
RCUITO

""actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales,  
 ""administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no  
 ""agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre  
 ""que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos  
 ""que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha  
 ""medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o  
 ""no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la  
 ""intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no  
 ""pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos  
 ""legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan  
 ""relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o  
 ""instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación,  
 ""en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un  
 ""solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios,  
 ""e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio  
 ""de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan  
 ""ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar  
 ""cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento  
 ""sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo  
 ""se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que  
 ""guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece  
 ""propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen  
 ""los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV,  
 ""para así estimar que es obligatorio agotarlo".-- Ahora bien, quien  
 "aquí resuelve estima pertinente tomar en consideración lo  
 "establecido en los artículos 1º, 17, fracción X, 25, 66 y 67 de  
 "la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León,  
 "los cuales al tenor literal establecen: "1. Esta Ley tiene por objeto





""establecer la organización y funcionamiento del Tribunal de lo  
""Contencioso Administrativo, dotado de facultades para conocer y  
""resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los  
""particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos  
""descentralizados y empresas de participación estatal y municipal  
""cuando estas últimas realicen funciones administrativas de autoridad;  
""el procedimiento para su resolución y ejecución; los recursos que los  
""particulares y las autoridades podrán interponer en contra de los fallos  
""que pronuncie... 17. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo  
""será competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra  
""de los actos o resoluciones que se indican a continuación, dictados,  
""ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por autoridades  
""administrativas, fiscales o entidades de la Administración Pública  
""Paraestatal o de los Municipios del Estado de Nuevo León, cuando  
""estas últimas actúen en carácter de autoridad:... X. Los que se  
""promuevan contra cualquier acto u omisión definitivos de las  
""autoridades administrativas del Estado, de los Municipios y de sus  
""entidades paraestatales o municipales, que afecten los intereses  
""jurídicos de los particulares;... 25. Los Magistrados de las Salas  
""Ordinarias conocerán indistintamente de los juicios que se promuevan  
""ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los casos a que  
""se refieren las fracciones I a XIV del Artículo 17, así como de los  
""recursos de queja que se interpongan con motivo de sus resoluciones,  
""quienes los substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que  
""señala esta Ley; a falta de disposición expresa y en cuanto no se  
""oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto en  
""el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León...  
""... 66. A petición expresa de parte, el magistrado instructor, en el

COLEGIADO  
ADMINISTRATIVO  
CIRCUITO

"mismo auto que admita la demanda, decretará la suspensión de los  
 "actos impugnados, haciéndolo saber sin demora a la autoridad  
 "demandada para su observancia.--- 67. La suspensión podrá  
 "solicitarla el actor en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia  
 "definitiva, y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se  
 "encuentren hasta en tanto se pronuncie sentencia.--- No se otorgará la  
 "suspensión cuando, de obsequiarla, se siga perjuicio al interés social, se  
 "contravengan disposiciones de orden público o se dejare sin materia el  
 "juicio.--- Cuando los actos materia de impugnación hubieran sido  
 "ejecutados temporal o provisionalmente y se afecte a particulares  
 "impidiéndoles el ejercicio de sus actividades habituales, entre tanto se  
 "pronuncie la resolución definitiva que corresponda, el magistrado  
 "instructor podrá dictar las medidas que estime pertinentes para  
 "restituir al demandante y preservar la materia de la litis, siempre que  
 "no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el  
 "levantamiento del estado de clausura... La suspensión podrá ser  
 "revocada por el magistrado instructor en cualquier etapa del juicio, si  
 "varían las condiciones por las cuales se otorgó".--- De los  
 "numerales antes transcritos, se advierte que el Tribunal de lo  
 "Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, será  
 "competente para conocer de los juicios que se promuevan en  
 "contra de los actos de las autoridades administrativas  
 "estatales o municipales, del Estado de Nuevo León.  
 "Asimismo, se establece que durante la tramitación del juicio  
 "respectivo, a petición expresa de parte, el magistrado  
 "instructor, en el mismo auto que admita la demanda,  
 "decretará la suspensión de los actos impugnados, haciéndolo  
 "saber sin demora a la autoridad demandada, no





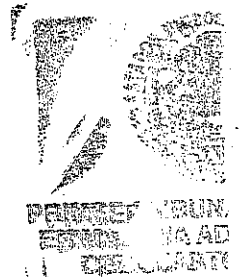
18

"estableciéndose mayores requisitos para otorgar la  
"suspensión que los que señala la Ley de Amparo para otorgar  
"la suspensión definitiva.--- Ahora bien, la quejosa, en su  
"escrito inicial de demanda, señala como actos reclamados los  
"proveídos de veinticuatro de mayo y primero de junio del  
"año en curso, emitidos por la Comisión de Acceso a la  
"Información Pública del Estado de Nuevo León, dentro del  
"expediente administrativo / promovido por  
'  
"en contra del Titular de la  
"Unidad de Enlace y Acceso a la Información de la  
"Universidad Autónoma de Nuevo León, proveídos los  
"cuales fueron emitidos por una Autoridad Administrativa del  
"Estado de Nuevo León, por lo tanto quien aquí suscribe  
"llega a la conclusión, de que antes de promover el juicio de  
"amparo la quejosa debió intentar el juicio contencioso  
"administrativo correspondiente, ante el Tribunal de lo  
"Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, ya  
"que es la autoridad competente para conocer de dicho medio  
"de defensa, además de que el mencionado juicio prevé la  
"suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos  
"que los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la  
"suspensión definitiva, en términos de los artículos 66 y 67 de  
"la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo  
"León, por lo que es inconcuso que en el presente caso se  
"configura la causal de improcedencia prevista en la fracción  
"XV, del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos  
"103 y 107 constitucionales, por lo que de conformidad con  
"lo establecido en la fracción III del artículo 74 de la ley de la

COLEGIO  
ADMINISTRATIVO  
CIRCUITO

"materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento del  
"presente juicio de garantías".

**CUARTO:** La recurrente expresa los siguientes agravios: "Se violan los artículos 74, 77 y 78 de la Ley de Amparo, al dictar la sentencia que sobresee el juicio en consideración a que ésta es incongruente, externa e internamente, baste para ello considerar la razón siguiente, la materia del juicio de (sic) fue una violación directa a la Constitución, precisamente a la garantía de seguridad jurídica prevista por los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, (Nota.- en aras de la brevedad solicito se me tenga por reproducido el contenido de los actos reclamados y los conceptos de violación que precisó el quejoso en su demanda de amparo), por ende, no es necesario el agotar otro medio de defensa antes de acudir al órgano de control constitucional, de otra suerte se interpretaría inexactamente los artículos 103, fracción I, y 107 constitucional, en otras palabras, cabe considerar que la garantía de audiencia no solo es la oportunidad que tiene el gobernado para adquirir ante la autoridad a ventilar una cuestión, sino que la garantía implica la oportunidad de que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, la admisión de la pretensión que se deduce, tan es así que por jurisprudencia firme se ha resuelto que debe de respetarse la garantía aunque la ley de donde emana el acto no la prevea.--- Sin duda alguna, en el caso que nos ocupa el juez de Distrito no le da el alcance que merece el artículo 14







"constitucional, respecto a la garantía de audiencia, porque el  
"concepto de oír a las partes, no es otro que es la tramitación  
"de la pretensión de la declaración a excepción de que la ley  
"de donde proviene el acto reclamado establezca la figura del  
"desechamiento o improcedencia antes de la admisión por  
"incumplir con algún requisito de fondo o de forma, lo que  
"no sucedió en el caso, por ende, la ley de donde proviene el  
"acto no establece la posibilidad jurídica sobre que se le dé al  
"interesado la oportunidad de oírse y defenderse, formalidad  
"esencial de todo proceso, porque resultaba indispensable que  
"se le brindara la oportunidad de rendir pruebas en defensa de  
"sus intereses, en consideración que al impedírsele la admisión  
"de su escrito de postulación en forma arbitraria, el derecho  
"de hacerlo, la audiencia otorgada carece de sentido y hace  
"nugatorio el derecho de defensa mutilándolo, en ese mismo  
"sentido, la violación directa a la garantía de legalidad nace en  
"el momento en que la autoridad que emite el acto reclamado  
"no dicta con precisión el precepto legal aplicable, menos  
"señala con precisión, las circunstancias especiales, las razones  
"particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en  
"consideración para la emisión del acto, necesitándose  
"además un engarzamiento entre los motivos argumentados  
"y las normas aplicables, esto es, en el caso concreto se  
"configuren las hipótesis normativas.--- Consecuentemente,  
"el sobreseimiento aplica inexactamente el artículo 74 de la  
"Ley de Amparo, por la existencia del principio de  
"definitividad, consistente en la violación directa a la  
"Constitución, tanto por la parte que emite el acto reclamado,

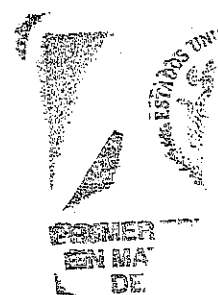


"como por la Ley de Acceso a la Información que no da la  
"oportunidad constitucional de defenderse en este caso a la  
"parte quejosa.--- Por lo tanto, el juez de amparo no apreció  
"el acto reclamado tal y como le fue probado en los autos,  
"resultando sin aplicación alguna, en consecuencia el artículo  
"76 de la Ley de Amparo".

**QUINTO:** Para mejor comprensión del caso y de la  
solución a la que se arribará, es menester indicar sus  
antecedentes:

**I.** El veintidós de mayo de dos mil seis,  
presentó demanda ante la Comisión de Acceso a la  
Información Pública del Estado de Nuevo León, contra el  
ingeniero Pablo Rivera Carrillo como Director de la Unidad  
de Enlace y Acceso a la Información de la Universidad  
Autónoma de Nuevo León, de quien impugnó la resolución  
contenida en el oficio UEAI-085/06, donde le negó la  
información solicitada consistente en copias de las actas de  
elección de los representantes alumnos de los grupos de  
licenciatura con derecho a pertenecer a la Junta Directiva de la  
Facultad de Odontología (foja 6 a la 10).

**II.** En relación a lo anterior, el Comisionado Presidente  
y el Secretario de Acuerdos y Proyectos en funciones de  
Director Jurídico de la referida comisión, en auto de  
veinticuatro de mayo de dos mil seis (foja 5), acordaron lo  
siguiente:





"... Con el escrito recibido curso (sic) en la oficialía de  
"partes de esta Comisión de Acceso a la Información Pública  
"del Estado, el día 22-veintidós de mayo del año en (sic), con  
"anexos que acompaña, suscrito por la  
"\_\_\_\_\_ escrito mediante el cual solicita la  
"intervención de este organismo autónomo en contra del  
"TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y  
"ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA  
"UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN,  
"solicitando se le proporcione diversa siguiente información;  
"en atención al mismo, es de señalar que la peticionaria  
"presentó su escrito de solicitud de información ante la  
"autoridad ahora demandada el día 05-cinco de abril del año  
"que antecede, según se observa en el acuse de recibo del  
"anexo que acompaña; ahora bien, el día 22-veintidós de  
"mayo del año actual, la C. \_\_\_\_\_ presentó  
"ante este organismo autónomo su solicitud de intervención  
"en contra de la autoridad señalada con anterioridad; por  
"consiguiente, la demanda fue presentada transcurrido el  
"plazo señalado en el artículo 36 de la ley de la materia, es  
"decir, pasaron 11-once días hábiles a aquél en que se tuvo a  
"la autoridad por contestando en sentido negativo, pereciendo  
"de esta manera el plazo de 10-diez días hábiles establecido en  
"el precepto antes mencionado el día 19-diecinueve de mayo  
"del año actual, descontándose los días 06-seis, 07-siete,  
"13-trece y 14-catorce de mayo por haber sido sábados y  
"domingos, inhábiles de acuerdo con el artículo 4 del  
"Reglamento Interior de esta Comisión; asimismo, se hace del



"conocimiento de la peticionaria que del día 10-diez al 21-  
"veintiuno de abril del presente año, se suspendieron las  
"labores de este organismo por motivo del primer período  
"vacacional, según el acuerdo publicado en el Periódico  
"Oficial del Estado el día 07-siete de abril de 2006-dos mil  
"seis, en su Tomo CXLIII; de igual forma, se consideraron  
"inhábiles para el cómputo de los términos los días 01-  
"primero y 05-cinco de mayo de los corrientes; en ese  
"contexto de ideas, es menester señalar que el cómputo del  
"término para la interposición de la demanda debe  
"establecerse a partir del día siguiente en que la autoridad  
"no responda en el plazo de 10-diez (sic) hábiles  
"contemplado en el artículo 19 de la ley sustantiva,  
"entregue información distinta a la solicitada o se niegue a  
"proporcionarla total o parcialmente, que en el presente caso  
"debió computarse a partir del día 04-cuatro de mayo del año  
"actual, día en que le concluyó el término a la autoridad para  
"dar respuesta al ahora actor; por lo tanto, esta Comisión  
"tiene a bien **DESECHAR POR EXTEMPORÁNEA** la  
"demanda interpuesta por la peticionaria en atención a las  
"anteriores argumentaciones de carácter legal ..."

PRIMER TRIBUNAL  
EN MATERIA ADMINISTRATIVA  
DEL CUARTO

III. En desacuerdo con lo anterior, el treinta de mayo  
siguiente (fojas 15 y 16), : interpuso ante la  
propia comisión, lo que denominó recurso de revisión.

IV. Respecto de dicho medio de defensa, el  
comisionado presidente y el secretario previamente



mencionados, el uno de junio del año en curso (foja 14 y su vuelta), proveyeron lo siguiente:

"... Con el escrito recibido en la oficialía de partes de  
"esta Comisión de Acceso a la Información Pública del  
"Estado, el día 30-treinta de mayo del año en curso, suscrito  
"por la C. dentro de los  
"autos que integran el expediente número ,  
"promovido por sus propios derechos en contra del  
"**TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y**  
"**ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA**  
"**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN,**  
"mediante el cual pretende interponer **RECURSO DE**  
"**REVISIÓN** en contra del auto de fecha 24-veinticuatro de  
"mayo de 2006-dos mil seis, en el que se desechó su solicitud  
"de intervención por ser **EXTEMPORÁNEA**; al respecto,  
"dígasele a la peticionaria que el medio de impugnación que  
"pretende interponer no se encuentra contemplado como  
"institución en la ley que nos rige, por lo que al no existir  
"dicha figura jurídica en la Ley de Acceso a la Información  
"Pública del Estado, no es jurídicamente posible la aplicación  
"de la supletoriedad que intenta hacer valer la actora respecto  
"de la Ley de Justicia Administrativa vigente en la entidad; ello  
"es así, dado que en lugar de procurar llenar la insuficiente  
"regulación de la ley de la materia, se estaría en su lugar  
"creando la figura jurídica del **RECURSO DE REVISIÓN,**  
"lo cual como anteriormente se mencionó, no es  
"jurídicamente dable, de lo contrario daría lugar a la creación



"de recursos no establecidos en la legislación que se pretende  
 "suplir, con lo que se desvirtuaría la finalidad de la  
 "supletoriedad, que es la de colmar las deficiencias de las  
 "disposiciones que reglamentan la figura jurídica prevista en el  
 "ordenamiento legal respecto del cual se aplica la  
 "supletoriedad, lo que en modo alguno implica que se  
 "sustituya al legislador en la determinación de no contemplar  
 "como medio de impugnación el recurso de mérito; por lo  
 "tanto, la competencia para la tramitación del recurso que  
 "prevé la ley supletoria, se ajusta exclusivamente para la Sala  
 "Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  
 "Estado, como órgano revisor de las resoluciones de las salas  
 "ordinarias, situación que no acontece en la conformación de  
 "este organismo colegiado; en ese sentido y para una mejor  
 "comprensión de lo anteriormente expuesto, se transcribe la  
 "tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito,  
 "Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
 "y su Gaceta, Tomo: XIX, Junio de 2004, Tesis: XX.2º.15 A,  
 "Página: 1477, Materia: Administrativa. Tesis Aislada, la que  
 "en su parte conducente se transcribe a continuación:

**“SUPLETORIEDAD EN MATERIA DE  
 “RECURSOS. NO SE ACTUALIZA ENTRE EL  
 “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA  
 “LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AL NO  
 “PREVER ÉSTA UN SISTEMA PROPIO DE TALES  
 “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN  
 “DEL ESTADO DE CHIAPAS).- El artículo 14 de la Ley  
 “de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas establece que a**

PRIME  
 EN V  
 L O

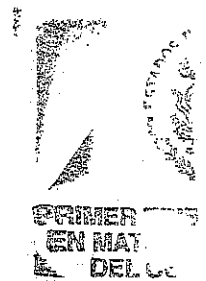


22

""falta de disposición expresa se estará a lo dispuesto por el Código de  
""Procedimientos Civiles del Estado. Ahora bien, para la procedencia de  
""la supletoriedad deben satisfacerse los siguientes requisitos: a) Que el  
""ordenamiento que se pretenda suplir la admita expresamente y señale  
""el estatuto supletorio; b) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad  
""prevenga la institución jurídica de que se trate; c) ~~Que~~ previendo dicha  
""institución, las normas existentes en el cuerpo a suplir sean  
""insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por  
""carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y, d) Que las  
""disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no  
""contraríen, de cualquier modo, ~~las bases~~ esenciales del sistema legal de  
""sustentación de la institución suplida. Así las cosas, la supletoriedad  
""del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a la Ley de Justicia  
""Administrativa, en materia de recursos ordinarios, no se actualiza, ya  
""que si bien la citada en último término admite la posibilidad de que a  
""falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo prescrito en  
""ese cuerpo legal se aplique como estatuto supletorio el código adjetivo de  
""que ~~se trata~~, al no prever un sistema propio de recursos por medio de  
""los cuales puedan revocarse o modificarse los autos que los presidentes  
""de las Salas Regionales Colegiadas en Materia Civil (erigidas en  
""Salas Administrativas) dicten dentro de los juicios de nulidad y, por  
""ello, su aplicación por analogía no se justifica, de tal manera que al no  
""regularse algo similar en la legislación administrativa, es evidente que  
""no le es aplicable supletoriamente lo dispuesto por el artículo 662 del  
""enjuiciamiento civil en consulta, que establece el recurso de reposición;  
""de lo contrario, daría lugar a la creación de recursos no establecidos en  
""la legislación que se pretende suplir, con lo que se desvirtuaría la  
""finalidad de la supletoriedad, que es la de colmar las deficiencias de las

AL COLEGIADO  
ADMINISTRATIVO  
QUINTANA ROO

""disposiciones que reglamentan la figura jurídica prevista en el  
 ""ordenamiento legal respecto del cual se aplica la supletoriedad, lo que  
 ""en modo alguno implica que se sustituya al legislador en la  
 ""determinación de no contemplar como medio de impugnación el recurso  
 ""de mérito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL  
 "VIGÉSIMO CIRCUITO. En virtud de lo expuesto en líneas  
 "anteriores, y en apoyo a la tesis transcrita, se **desecha de**  
 "plano la tramitación del recurso que pretende hacer valer la  
 "parte actora, por lo que debe estarse a lo ordenado mediante  
 "proveído de fecha 24-veinticuatro de mayo del año en curso.  
 "Finalmente, no es óbice a lo anterior dejar de señalar, que la  
 "peticionaria argumenta en el escrito de cuenta, que en base al  
 "artículo 36 de la ley de la materia promovió en tiempo su  
 "demanda de acceso a la información, dado que la interpuso  
 "dentro de los 10-diez días siguientes al de su notificación, es  
 "decir, después del día 08-ocho de mayo del año actual en que  
 "le fue notificada la negativa de la autoridad a proporcionar la  
 "documentación requerida, por lo que no le asiste a razón a la  
 "compareciente, en virtud de lo siguiente; en primer término,  
 "la autoridad demandada no dio respuesta a la solicitud de  
 "información dentro del lapso previsto en la ley, que es el de  
 "10-diez días, ahora bien, a partir de ese momento la  
 "peticionaria tenía expedita su acción para hacerla valer ante  
 "este órgano autónomo, y no como lo refiere 10-diez días  
 "después de que la responsable le diera contestación, de lo  
 "contrario se dejaría al arbitrio del peticionario la  
 "interposición de la solicitud de intervención, y en dado caso,  
 "con el análisis hecho por la promovente se tendría que







3

"admitir la demanda aun cuando la responsable le negara la  
"información 20-veinte días después del plazo previsto en la  
"ley, lo cual no fue el espíritu del legislador; por el contrario,  
"en los artículos 34, 36 y 37 de la ley de la materia, se  
"establece claramente que se solicitará la intervención de la  
"Comisión, cuando se surta cualquiera de los tres supuestos  
"en ellos enumerados, es decir, cuando la autoridad se niegue  
"expresamente a proporcionar la información solicitada, si  
"transcurrido el plazo legal para su entrega no recibió  
"respuesta o la hubiese proporcionado de forma parcial o  
"distinta a la requerida-ambos casos dentro del término  
"previsto en el artículo 19 de la ley-, y si la autoridad reitera  
"total o parcialmente su criterio en la reconsideración que se  
"hubiere interpuesto. Lo anterior tiene su fundamento en los  
"dispositivos legales invocados. **Notifíquese personalmente**  
"a la ~~peticionaria~~. ..."

✓ Luego, mediante escrito presentado ante la Oficina  
de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en  
Materia Administrativa en el Estado, el diecinueve de junio  
del año en curso, la instadora promovió juicio de garantías en  
el que reclamó de la Comisión de Acceso a la Información  
Pública de esta Entidad Federativa, los proveídos reseñados  
en los antecedentes II y IV (es decir, los de veinticuatro de  
mayo y uno de junio de dos mil seis, en los que,  
respectivamente, se desechó la instancia original, así como el  
recurso de revisión interpuesto contra tal desechamiento).



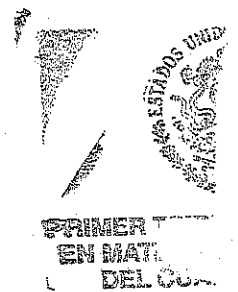
AL COLEGIADO  
ADMINISTRATIVO  
CIRCUITO

VI. Una vez admitida la demanda de amparo y sustanciado el juicio por sus etapas legales, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa dictó sentencia constitucional, en la que consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque acorde con los numerales 1, 17, fracción X, 25, 66 y 67 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, contra los proveídos reclamados era procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia, decretó el sobreseimiento en el juicio.

VII. En desacuerdo con tal decisión, la parte quejosa interpuso el presente recurso de revisión al tenor de los agravios transcritos.

Precisado lo anterior, este tribunal considera que le asiste razón a la recurrente en cuanto asevera que la sentencia recurrida viola lo dispuesto por los artículos 74, 77 y 78 de la Ley de Amparo y, por ende, es incongruente interna y externamente.

Lo anterior se considera así, dado que la razón aducida por el a quo para considerar improcedente el juicio de garantías constituye, precisamente, el fondo de la litis constitucional.





Así es, en el acto reclamado consistente en al auto de uno de junio de dos mil seis, se desechó el recurso de revisión que la ahora quejosa promovió. La consideración toral que para ello tomó en cuenta la responsable, fue que dicho medio de defensa no existía en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por lo que, la supletoria intentada de la Ley de Justicia Administrativa vigente en la entidad no era jurídicamente posible, dado que en lugar de colmar insuficiencias de la legislación, se estaría creando la figura jurídica del recurso de revisión, además de que implicaba una sustitución del legislador quien determinó no contemplar como medio de impugnación el recurso de mérito.



Sobre este particular, vía concepto de violación la impetrante esencialmente manifestó que el desechamiento del recurso de revisión era ilegal, porque si bien la Ley de Acceso a la Información Pública no establecía algún medio de defensa, en su artículo 43 establece que en todo lo no previsto por esa legislación se aplicaría supletoriamente la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y, en defecto de ésta, el Código de Procedimientos Civiles también de esta entidad, por lo que, el legislador dispuso que la complementara. Asimismo, expuso la impetrante que la "ejecutoria" en que se apoyó la responsable para desechar no era aplicable, pues versaban sobre situaciones diversas; que es una garantía para el gobernado que todo cuerpo legal que imponga cargas a los particulares establezca los medios de defensa para no dejarlos en estado de indefensión, que el juicio de amparo no es el

único medio para ello, sino que el legislador en la nueva praxis jurídica tiende a complementar las legislaciones, bajo el principio de colaboración, sin que la legislación que suple pueda ir en contra de la que se suple, sino que deben complementarse en aras de lo previsto por el artículo 17 constitucional y no tener trabas o lagunas durante su desarrollo, de ahí que el legislador consideró que teniendo la Ley de Justicia Administrativa un medio de defensa carecía de sentido que la Ley de Acceso a la Información Pública tuviera más medios y fue por ello que remitió a la primera.

Luego, como ya se dijo, en la sentencia constitucional el a quo resolvió que el juicio de amparo era improcedente con fundamento en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque acorde con los numerales 1, 17, fracción X, 25, 66 y 67 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, contra los proveídos reclamados era procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Bien, de lo expuesto se conoce que mientras la parte quejosa planteó la supletoriedad de la Ley de Justicia Administrativa a la de Acceso a la Información Pública, ambas de esta Entidad Federativa, en cuanto a la procedencia del recurso de revisión, el a quo decidió que el juicio intentado era improcedente porque debió agotarse el juicio contencioso administrativo (dentro del cual se contempla el recurso de revisión, delimitado por Ley de Justicia





Administrativa); proceder que desde luego deviene incongruente, puesto que precisamente el fondo del amparo versa sobre la procedencia de la supletoriedad de la última ley citada, de suerte que, el a quo no podía valerse de la cuestión a dilucidar en el fondo del amparo para decretar su improcedencia.

Siendo necesario destacar que si bien al resolver el juez de amparo como lo hizo, implícitamente está reconociendo la supletoriedad hecha valer por la impetrante del amparo, lo cierto es que ello lejos de beneficiarle le perjudica, puesto que al sobreseer en el juicio los actos reclamados quedan firmes, toda vez a pesar de que el criterio de la responsable se opone al sostenido por el juez, ante la inexistencia de alguna resolución que le obligue a tramitar el medio de impugnación hecho valer, evidentemente prevalecerá lo que la comisión resolvió sobre el particular.

Ilustran lo anterior, por las razones que las informan, la jurisprudencia y tesis que enseguida se insertan:

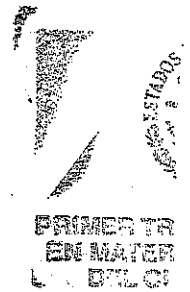
Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, Enero de 2002. Página: 5. Tesis: P./J. 135/2001. Jurisprudencia Materia(s): Común.

**"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE  
"AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE**

COPIADO  
ADMINISTRATIVO  
JUNIO

**"INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL  
"ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.** Las causales de  
"improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e  
"inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una  
"en la que se involucre una argumentación íntimamente  
"relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse".

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de  
Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su  
Gaceta. XXII, Octubre de 2005. Página: 2502. Tesis: V.2o.  
46.K. Tesis Aislada. Materia(s): Común.



**"SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA  
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO PROCEDE  
"DECRETARLO SI SU EXAMEN INVOLUCRA  
"ASPECTOS VINCULADOS CON EL FONDO DE  
"LA CONTROVERSIA PLANTEADA.** Si el examen de  
"la cuestión alegada, involucra aspectos vinculados con el  
"fondo de la controversia planteada, no es dable sobreseer en  
"el juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional,  
"pues su estudio sólo puede llevarse a cabo legalmente en la  
"sentencia que se llegue a dictar, ya que es en ésta donde se  
"resuelven los hechos controvertidos y se examinan los  
"conceptos de violación y, por ende, ello impide afirmar  
"categóricamente que la demanda de garantías promovida es  
"notoriamente improcedente; porque si bien, es factible  
"decretar dicho sobreseimiento fuera de la audiencia  
"constitucional, ello es así, con la única condición de que la



26

"causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que, además, las pruebas que pueda aportar al juicio el reclamante de garantías no alteren el resultado del fallo, esto es, el motivo de improcedencia debe ser tan claro y evidente que no deje lugar a dudas".

En razón de lo expuesto, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que procede es levantar el sobreseimiento decretado por el a quo, y que este tribunal se avoque al estudio de los conceptos de violación hechos valer.

**SEXTO:** En el único concepto de violación, la parte quejosa a la letra adujo:

"Se viola en mi perjuicio, la **GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA**, prevista por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en consideración a que no es extemporánea mi primer solicitud, así se puede observar del conteo del término que existe en forma real y no en la manera que lo contabiliza la responsable, dado que los términos empiezan a contar al día siguiente de que se notifique el acuerdo en los términos del artículo 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública de Nuevo León, por lo tanto, al no darse los supuestos de la norma en comento, resulta cierta la afirmación en el sentido de que se dejó de aplicar este dispositivo y, por ende, se violan mis derechos



UNAL COLEGIADO  
ADMINISTRATIVO  
PRIMER CIRCULO

"subjetivos públicos y la garantía citada.--- El tercero  
 "perjudicado me notificó la negativa a la información el día 8  
 "de mayo del año actual (Anexo No. 3) y mi solicitud de  
 "intervención de la comisión de acceso a la Información  
 "Pública de Nuevo León, como autoridad responsable me fue  
 "recibida el día 22 de mayo del año en curso (Anexo No. 2, la  
 "original está en el expediente 028/2006 de la autoridad  
 "responsable).--- Del mismo modo, el desechamiento del  
 "recurso de revisión, no se encuentra ajustado a lo previsto  
 "por los artículos 89, 90 y 91 de la Ley de Justicia  
 "Administrativa del Estado de Nuevo León, baste observar  
 "que, si la Ley de Acceso a la Información no establece medio  
 "de defensa, también lo es que, para ello en su artículo No. 43  
 "(art. 43 Ley de Acceso a la Información Pública de Nuevo  
 "León: En todo lo no previsto por esta ley se aplicará  
 "supletoriamente la Ley de Justicia Administrativa para el  
 "Estado de Nuevo León y en defecto de ésta, el Código de  
 "Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León),  
 "remite a las disposiciones de la Ley de Justicia  
 "Administrativa; **A FIN DE QUE LA COMPLEMENTE,**  
 "por disposición expresa del legislador, por lo tanto, ninguna  
 "ejecutoria puede ir en contra de la ley, para apuntalar lo  
 "señalado, no debemos de olvidar que el artículo 11 del  
 "Código Civil de este Estado, dispone que contra la  
 "observancia de la ley, no puede alegarse práctica en  
 "contrario, desde luego, no se desconoce que la jurisprudencia  
 "es obligatoria para todas las autoridades según lo prevén los  
 "artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, pero en el caso en







27

"comento, se trata de dos situaciones distintas las que existen  
"entre la que nos ocupa y la que aparece en la ejecutoria en  
"que se fundamenta la responsable, para desechar el medio de  
"impugnación. Es de resaltar, que el criterio de la responsable,  
"fue común, en los tiempos en que el Código de Comercio,  
"no preveía la figura de la caducidad, por lo tanto, una  
"institución no prevista por la legislación a suplir, no era  
"posible su creación. Sin embargo, es una garantía que todo  
"cuerpo legal, que impone cargas a los particulares, establezca  
"los medios de defensa, para no dejarlos en estado de  
"indefensión, y no es propiamente el juicio de amparo el  
"único remedio, sino que el legislador bajo la nueva praxis  
"jurídica, tiende a complementar las legislaciones bajo el  
"principio de colaboración, sin que la legislación que suple,  
"pueda ir en contra de la que se suple, sino que debe  
"complementarse en aras de lo previsto por el artículo 17  
"constitucional, sobre que la justicia debe ser expedita, y no  
"tener **TRABAS O LAGUNAS**, durante su desarrollo, de tal  
"suerte si el legislador del Estado de Nuevo León, consideró  
"innecesario que teniendo la Ley de Justicia Administrativa un  
"medio de defensa, carecía de sentido, que la Ley de Acceso a  
"la Información igualmente tuviera más medios, por ello  
"remitió esta etapa procesal, a la primer ley.--- Y así, queda  
"claro que de lo expuesto, se concluye que efectivamente se  
"actualizan las hipótesis planteadas, en el sentido de la  
"existencia de las violaciones alegadas a mis derechos  
"subjetivos públicos, por ataque a la garantía de seguridad  
"jurídica, prevista por los artículos 14 y 16 del Pacto Federal,

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
JUNTA COLEGIADA  
ADMINISTRATIVA  
PRIMER CIRCULO

"al dictarse los dos autos tanto de manera inmotivada, al no  
"ser reales y ciertas las afirmaciones que en cada uno de ellos  
"expresa la autoridad, para no darle trámite a mis solicitudes,  
"como en forma infundada, desde el momento en que  
"resultan inaplicables las normas que se fundó para desechar  
"las promociones".

**SÉPTIMO:** Por razón de método se estudiarán, en primer término, los argumentos enderezados contra el acto reclamado consistente en el auto de uno de junio de dos mil seis, en los cuales se cuestiona el desechamiento del recurso de revisión que intentó la quejosa, para posteriormente y, de resultar procedente, examinar los expresados contra el auto de veinticuatro de mayo del año que cursa.

Así pues, este tribunal considera que no le asiste razón a la impetrante de garantías, atento a las siguientes consideraciones de derecho:

El artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, a la letra dispone:

**"Artículo 43.** En todo lo no previsto por esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, y en defecto de ésta, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León".



28

Esto es, en el régimen de supletoriedad que prevé la ley en comento, es de primer orden la Ley de Justicia Administrativa y, en el caso de que ésta no prevea lo conducente, del código adjetivo civil, ambos de esta Entidad Federativa.

Ahora, la supletoriedad sólo tiene lugar en aquellas cuestiones que comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación, o deficientemente reglamentadas; es decir, para que se actualice la supletoriedad de normas respecto de otras, es necesario que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trata, de forma tal que, cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoría se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones.

En la especie no ocurre lo anterior, dado que del análisis de la Ley de Acceso a la Información Pública se desprende que el legislador no contempló la figura del recurso de revisión; de ahí que no pueda estimarse válidamente que opere la supletoriedad en materia de recursos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, pues con ello se daría lugar a la creación de figuras procesales no establecidas en la legislación que se pretende suplir, suplantando la voluntad del legislador y desvirtuando la finalidad de la supletoriedad, que es la de complementar las



UNAL COLEGIADO  
ADMINISTRATIVO  
PRTO CIRCUITO

deficiencias de las disposiciones que reglamenten la figura jurídica prevista en el ordenamiento legal respecto del cual se aplica.

Ilustran lo anterior, unas por analogía y otras por las razones que las informan, las tesis que enseguida se transcriben y son compartidas por este cuerpo colegiado:

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Agosto de 2004. Página: 1689. Tesis: XXII.2o.16 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.

**"SUPLETORIEDAD EN MATERIA  
"MERCANTIL. NO OPERA AL TRATARSE DE LA  
"PRESCRIPCIÓN.** La aplicación de las leyes supletorias "sólo tiene lugar en aquellas cuestiones que comprendidas en "la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación, "o deficientemente reglamentadas, pero al tratarse de la "prescripción, los artículos 1038 a 1048 del Código de "Comercio establecen todas las reglas para dirimir las "controversias que sobre ello se susciten, por tanto, no debe "aplicarse en forma supletoria el artículo 1161 de la legislación "civil federal, para la prescripción de las acciones que ahí se "mencionan, pues al hacerlo, se excluye en forma absoluta la "aplicación de la ley comercial, lo cual no es la razón de ser de "la supletoriedad".

PRESENTE  
EN MATERIA  
DEL CUA



Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, Abril de 2002. Página: 1361. Tesis: I.6o.A.27 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

**"SUPLETORIEDAD, INEXISTENCIA DE LA, EN TRATÁNDOSE DE LA FIGURA DE LA CADUCIDAD DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Ha sido criterio reiterado de los Tribunales Colegiados de Circuito que entre los requisitos necesarios para que se actualice la supletoriedad de normas respecto de otras, es necesario que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trata. En el caso, del análisis de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende que el legislador no contempló la figura de la caducidad en tratándose de procedimientos administrativos; de ahí que no pueda estimarse válidamente que opere la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos de dicha ley, para que se pueda crear la figura de la caducidad procesal".

Luego, en cuanto al argumento consistente en que la tesis invocada por la responsable no es aplicable al caso por tratarse de situaciones diversas, no obstante que se trata de una afirmación gratuita, puesto que la quejosa no efectúa algún razonamiento tendiente a demostrar su aseveración, este órgano jurisdiccional estima que tampoco le asiste razón,



VAL COLEGIADO  
ADMINISTRATIVA  
O CIRCUITO

dado que basta la lectura del auto en examen para constatar que no sólo invocó dicha tesis, sino que previo a ello, expuso una serie de consideraciones relativas a la improcedencia de la supletoriedad intentada por la entonces instadora, de forma que al invocarla sólo lo hizo para una mejor comprensión de sus consideraciones, empero no, porque se tratara de la misma hipótesis legal; además de que, las razones expuestas en el criterio de referencia son compartidas por este tribunal federal, de forma tal que al guiar la determinación de la responsable, se considera correcto su proceder y, en consecuencia, infundado el argumento de la quejosa.



**OCTAVO:** Previo al estudio del diverso acto reclamado (auto de veinticuatro de mayo de dos mil seis), es necesario recapitular que en esta ejecutoria, por una parte, se resolvió que era incorrecto el sobreseimiento decretado por el a quo al considerar improcedente el juicio de garantías al no promover el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado (principio de definitividad); y, por otra, que en materia de recursos, la ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, no era supletoria a la de Acceso a la Información Pública, lo cual implica que el desechamiento del recurso de revisión estuvo ajustado a derecho.

Entonces, con motivo de esto último, ante la improcedencia del recurso de revisión que la imperante hizo valer para combatir el proveído de veinticuatro de mayo del



año en curso, es inconcuso que la vía legal para reclamarlo es el juicio de amparo.

Bien, en el acto examinado (foja 5), la responsable desechó por extemporánea la solicitud, aduciendo lo siguiente:

1. Que la peticionaria presentó su solicitud de información ante el Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de Nuevo León el cinco de abril de dos mil seis, y que fue hasta el veintidós de mayo de ese mismo año que petitionó la intervención de la comisión en cita, por lo que, conforme con el artículo 36 de la ley de la materia, esta última se presentó transcurrido el plazo de diez días (ya que pasaron once), pues aquél feneció el diecinueve de mayo.

Que el cómputo de la temporalidad para interponer la demanda debe establecerse a partir del día siguiente en que la autoridad no responda en el plazo de diez días hábiles contemplado por el artículo 19 de la ley regulatoria, entregue información distinta a la solicitada o se niegue a proporcionarla total o parcialmente; que en el caso debió computarse a partir del cuatro de mayo, pues ese día concluyó el plazo de la autoridad para darle respuesta.

Contra lo anterior, en el concepto de violación relativo la impetrante en esencia sostiene que contrario a lo afirmado



por la responsable, la presentación de su demanda o solicitud ante la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado no fue extemporánea, dado que con fundamento en el artículo 36 de la ley relativa, los términos empiezan a contar al día siguiente de que se notifique el acuerdo, por lo que, si en el caso la negativa de información se le notificó el ocho de mayo de dos mil seis, y la solicitud de intervención a la comisión fue recibida el día veintidós siguiente, es evidente que se presentó dentro de los diez días que el mencionado numeral prevé para tal efecto.

Lo anterior es fundado.

En efecto, a foja 11 del juicio de amparo subyacente se encuentra el instructivo a través del cual la Unidad de Enlace y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de Nuevo León, notifica la respuesta dada a la solicitud de información el día ocho de mayo de dos mil seis. Asimismo, en la parte inferior izquierda de la foja 10 del amparo, se aprecia el sello impreso por la Comisión de Acceso a la Información Pública a la última hoja de la demanda o solicitud de intervención presentada por Mendoza Ortiz, del cual se desprende como fecha de recepción el veintidós de mayo del año citado.

Ahora, en relación a la temporalidad para acudir ante la comisión en comento y solicitar su intervención, el numeral







36 de la Ley de Acceso a la Información Pública a la letra dispone:

"Artículo 36. El plazo para acudir a la Comisión será "dentro de los diez días siguientes a aquel en que se le "notifique al interesado la negativa, se tenga a la autoridad por "contestando en sentido negativo o la solicitud haya sido "contestada de manera distinta o parcial".

Como se ve, para el efecto indicado el numeral establece el término de diez días, mismos que, con apoyo en el diverso 45 de ese propio cuerpo legal, deben entenderse como hábiles —ya que establece que todos los plazos contenidos en esa ley se entiende que serán días hábiles—.

Entonces, si la solicitante conoció la respuesta dada por el funcionario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el ocho de mayo de dos mil seis y presentó su demanda ante la comisión el día veintidós siguiente, es inconcuso que la interpuso precisamente el día en que feneció dicho periodo (pues entre esas fechas transcurrieron justamente diez días, descontando el trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo, por ser sábados y domingos) y, por ello, resulta ilegal el desechamiento que por extemporáneo efectuó la autoridad responsable.

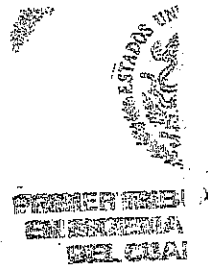
Importa destacar que no pasa inadvertido para este tribunal federal, que para efectos de la temporalidad de la



UNAL: LEGADO  
ADMINISTRATIVO  
RTO CIRCUITO

demanda, la responsable partió de una hipótesis distinta a la aquí analizada, ya que realizó el cómputo a partir de la fecha en que la potestad requerida de información no respondió en el plazo de diez días que contempla el artículo 19 de la ley de la materia, lo cual le llevó a concluir que el término legal para interponer la demanda inició el cuatro de mayo de dos mil seis (fecha en la que feneció el plazo a la autoridad para atender la solicitud de información, considerando que la petición se formuló el cinco de abril).

Sin embargo, a juicio de este tribunal esa hipótesis de partida no es la correcta, dado que está fehacientemente demostrado que el titular de la unidad de enlace de la universidad mencionada, sí dio respuesta a la solicitante y, por ello, debe considerarse la notificación de aquella como inicio del plazo para solicitar la intervención de la comisión; máxime que, para considerar el supuesto del cual parte la responsable, es necesario conocer la fecha en que se presentó la solicitud de información y, sobre ese evento existe discrepancia, ya que mientras en el oficio de respuesta UEAI-085/06 (foja 12), el funcionario universitario plasmó: *"...me permito dar respuesta a la petición de información presentada ante esta Unidad el día 06-seis de abril de 2006-dos mil seis, ..."*, en el acto reclamado de desechamiento de demanda se dijo: *"...que la peticionaria presentó su escrito de solicitud de información ante la autoridad ahora demandada el día 05-cinco de abril del año que antecede, según se observa del acuse de recibo del anexo que acompaña..."*, sin que en el sumario obre tal acuse de recibo y, además, sin que la quejosa





2

ni las responsables hubieren proporcionado mayor información al respecto; de ahí que, no pueda validarse lo resuelto por la comisión de mérito.

En las relatadas consideraciones, queda claro que se violentó en perjuicio de la garantía de seguridad jurídica consagrada por el artículo 16 del Pacto Federal, lo cual torna procedente concederle el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el auto de veinticuatro de mayo de dos mil seis, dictado dentro del expediente 28/2006 y, en su lugar, emita otro en el que admita la demanda o solicitud de intervención que presentó el veintidós de mayo de dos mil seis, siempre y cuando no advierta alguna causa diversa a la aquí analizada, que le impida proceder en tales términos, pues sólo así se le restituirá en el goce de la garantía individual trastocada, tal como lo dispone el artículo 80 de la Ley de Amparo.

§ Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

**PRIMERO:** Se revoca la sentencia que se revisa.

**SEGUNDO:** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a , respecto del acto reclamado consistente en el auto de uno de junio de dos mil seis,



INAL COLEGIADO  
ADMINISTRATIVA  
ITO CIRCUITO

atribuido a las responsable, por las razones y fundamentos precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria.

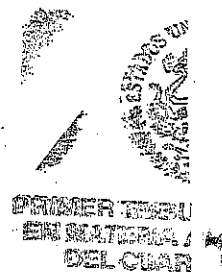
**TERCERO:** Para los efectos precisados en la parte final del considerando octavo de este fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a \_\_\_\_\_, respecto del acto reclamado a las responsables que hizo consistir en el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil seis, dictado dentro del expediente 28/2006.

Notifíquese.

A S Í, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, integrado por los magistrados Eduardo López Pérez, Rodolfo R. Ríos Vázquez y Sergio Eduardo Alvarado Puente, el primero de los mencionados como presidente y el segundo como ponente, quienes firman para sus efectos legales, juntamente con la secretaria de acuerdos.-  
Doy fe.

**MAGISTRADO PRESIDENTE:**

**LIC. ~~EDUARDO~~ LÓPEZ PÉREZ.**





3

MAGISTRADO PONENTE:

LIC. RODOLFO R. RÍOS VÁZQUEZ.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS:

LIC. MARIA CIRA FAZ MENDOZA.



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO  
DE MATERIA ADMINISTRATIVA  
CUARTO CIRCUITO

En nueve de noviembre de dos mil seis, la suscrita secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, CERTIFICO que esta foja es la última de la ejecutoria pronunciada dentro del amparo en revisión número 536/2006, en la sesión de la misma fecha.- Conste.

LIC. MARIA CIRA FAZ MENDOZA.

L'AMCHM/alt\*

En 14 NOV. 2006, siendo las 14:40  
horas, se recibieron en la Secretaría de Acuerdos, los autos  
y la sentencia anterior, que fue aprobada en Sesión de este  
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del  
Cuarto Circuito, de fecha 09 NOV. 2006 y  
se pasan al C. Actuario para su notificación. Doy fe.

15 NOV. 2006 siendo las nueve horas, notifico  
el proveído anterior a las partes, por medio de lista que fijo en  
estrados Art. 28, Fracción III de la Ley de Amparo. Doy fe.

15 NOV. 2006 siendo las catorce horas, doy  
por hecha la notificación anterior a las partes, por no haber  
comparecido a oír personalmente, Art. 28, Fracción III de  
la Ley de Amparo. Doy fe.



PRIMER TRIBUNAL  
EN MATERIA /  
DEL CUARTO